



Página Roja

nueva época

EN DEFENSA DE LO PÚBLICO

nº 4

JUNIO 2026

DONATIVO 4€

Equipo editorial

Laura R.
J. Martínez
Jordi Jaime Sanz

Maquetación

Equipo de Comunicación de
Corriente Roja

Depósito legal

SE-7816-2011

Nuestras webs

www.corrienteroja.net
www.correntroig.org
www.litci.org

Contacto

info@corrienteroja.net



@corrienteroja

Índice

4

La lucha por una
educación pública y de
calidad

6

Entrevista a Luis, personal
de mantenimiento
mecánico y Delegado
sindical del MATS

8

Trabajadoras y
trabajadores de la
Comunidad de Madrid
organizan una plataforma
para luchar por la
recuperación de la jornada
de 35 horas

9

¿Por qué se deja morir y se
desmantela lo público?

11

Las estrategias y las
excusas para privatizar el
sector público. El caso de
la colaboración público-
privada

12

Entrevista a Juan,
Bombero forestal de
Andalucía

E

Editorial

14 Apuntes sobre la prioridad nacional

16 La lucha contra la privatización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Alcalá del Río

18 La destrucción de lo público, un arma para oprimir y dividir a la clase

20 Por un programa de rescate de los servicios públicos

23 Vivienda y energía. ¿Qué entra en lo público y con qué criterio?

25 El gasto militar, un gasto improductivo que no crea riqueza social

26 Por un partido y un gobierno de los y las trabajadoras

Llevamos 20 años de decadencia y desmonte de los servicios públicos. Faltan recursos, los servicios empeoran, las trabajadoras pierden poder adquisitivo cada año, las privatizaciones avanzan detrás de la cortina de la colaboración público-privada. Los gobiernos les regalan nuestros impuestos a empresas privadas convirtiendo necesidades básicas en negocio. A la vez crean nuevos nichos de mercado, ya que delante de la falta de las inacabables listas de espera, o la falta de plazas en educación, aquellos que se los pueden pagar optan por irse a la privada.

Frente a esta realidad, la clase trabajadora no permanece parada. Estamos asistiendo a huelgas históricas en varios sectores de servicios públicos. Huelgas que suponen los primeros pasos en el camino que debemos seguir para defender unos derechos vitales para nuestra clase, pero que a la vez expresan grandes límites. El pronunciado carácter corporativista, la falta de unidad con otros sectores, el no convertir los conflictos sindicales en conflictos políticos, la dirección de la burocracia sindical... impiden que las movilizaciones avancen hacia la construcción de una huelga general por un programa de rescate de lo público.

No podemos desconectar la crisis de los servicios públicos, del mundo cada vez más convulso en el que vivimos. Avanza la barbarie: genocidios, guerras, catástrofes, represión, pérdida de derechos, agresiones machistas, aumento del coste de vida... El resultado de ello es que la desigualdad aumenta, los ricos cada vez son más ricos, y la clase trabajadora más pobre. El "España va bien" de Sánchez o la prioridad nacional del PP-Vox, ocultan que la causa fundamental de la crisis de los servicios públicos, de sus recortes, falta de financiación, privatización... es que vivimos en un sistema capitalista que funciona "bien" cuando como ahora garantiza beneficios empresariales records.

Delante de esta realidad publicamos este nuevo número del Página Roja, que busca discutir, las causas de la destrucción de los servicios públicos, sus consecuencias, las luchas que están dando, y cual es la salida estratégica que necesitamos la clase trabajadora, para enfrentar la situación.

La lucha por una educación pública y de calidad

J. Martínez

Cataluña, la Comunitat Valenciana, las trabajadoras del preescolar de todo el estado, previsiblemente Madrid en septiembre: el movimiento docente acumula meses de movilizaciones históricas que enlazan con las grandes huelgas protagonizadas en Asturias el año pasado.

Los recientes rechazos a los pactos alcanzados por las direcciones sindicales y los gobiernos autonómicos, que contenían algunas conquistas importantes en materia salarial, demuestran que la base del conflicto no era conseguir algunas migajas. Son luchas que enfrentan la crisis estructural que vive la educación pública en el estado español, y lejos de ser episodios aislados, constituyen hoy la vanguardia de la defensa de los servicios públicos.



La crisis estructural de la educación pública

El nivel de movilización docente no surge de la nada: responde a un deterioro acumulado y cuantificable. Según datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, el Estado español destinó en 2023 apenas el 4,6% de su PIB a educación, en 2024 retrocedió al 4,48%, muy lejos del 7% que los expertos consideran umbral mínimo para salir de la llamada "pobreza educativa".

El origen de la crisis se sitúa en los recortes aplicados a partir de 2010 que nunca han sido revertidos. Un estudio de la Confederación Intersindical STEs-I concluye que entre 2010 y 2024 el IPC acumuló una subida del 36,4%, mientras que el salario del profesorado solo creció un 14,5%: una pérdida de poder adquisitivo del 21,9%.

Las sucesivas reformas educativas han incrementado las ratios alumno-docente, comprometien-

do la atención individualizada. Las prometedoras innovaciones pedagógicas (trabajo por proyectos, evaluación por competencias) se han traducido en la práctica en una sobrecarga burocrática insostenible, sin que se hayan dotado los recursos materiales ni humanos necesarios para implementarlas con garantías.

El resultado de esta desinversión crónica es la privatización encubierta del sistema. La falta de plazas públicas suficientes ha generado un enorme nicho de mercado para las empresas privadas, especialmente en la FP, mientras el Estado financia generosamente la educación concertada y privada. En 2024, los conciertos y subvenciones a centros privados alcanzaron los 8.342 millones, un 11,7% del gasto total. Entre 2011 y 2021, el gasto en conciertos creció un

28,5%. El dinero público fluye hacia la Iglesia y grandes corporaciones mientras la escuela pública se desmonta.

Principales lecciones de las luchas en curso

Si las movilizaciones ya han conseguido arrancar algunas conquistas a los gobiernos es debido a su nivel de masificación, que está relacionada por una parte con haber superado los marcos de un conflicto sindical para convertirse en un conflicto social. El País Valencià ha sido el mayor ejemplo, logrando la participación de la mayoría del profesorado y el apoyo y amplia movilización de familias y estudiantes. Para conseguirlo ha sido clave que las reivindicaciones (más recursos, menos ratios, menos burocracias, más salario) defendían derechos

del conjunto de la comunidad educativa y no solo del profesorado.

Por otra parte, en Catalunya, el conflicto ha atravesado tres periodos de huelgas durante el presente curso. Su principal conquista organizativa es la construcción de centenares de asambleas de centro que, articuladas en estructuras comarcales y territoriales, han dotado al movimiento de una capacidad de movilización sostenida que los sindicatos mayoritarios son incapaces de garantizar por sí solos. Esta arquitectura asamblearia ha sido la coraza que ha permitido resistir la represión institucional, la traición de UGT y CCOO, que firmaron a espaldas de la plantilla un acuerdo en marzo y el rol de USTEC y ASPEC como burocracia sindical de izquierdas, que recientemente firmaron un preacuerdo pasando por encima de las asambleas para desmovilizar.

Los sindicatos (todos) son organizaciones necesarias para las luchas inmediatas de la clase trabajadora porque la dotan de una organización estable, pero son conservadores por esencia: son un aparato, con un número determinado de profesionales desconectados, aunque sea parcialmente, de las condiciones materiales de vida de los trabajadores/as a quienes supuestamente representan. Cuando se intenta desatar un movimiento potente desde abajo, que desborda a los sindicatos y que se autoorganiza, la tendencia conservadora de los sindicatos actúa como freno.

Para garantizar la continuidad de la lucha para revertir el conjunto de ataques que ha sufrido la educación en los últimos 20 años, tanto la autoorganización como la movilización del conjunto de la sociedad debe avanzar. Es imprescindible unir las luchas de la comunidad educativa con el resto de las trabajadoras públicas, por un programa común de rescate de los servicios públicos, ya que la destrucción es generalizada. Igualmente es esencial la entrada

en escena del movimiento estudiantil.

Por otro lado, es necesario consolidar la estructura asamblearia en Catalunya, y extenderla al resto del estado español. La autoorganización de los trabajadores/as es la única garantía, para poder resistir frente a los ataques de los gobiernos, y las traiciones de la burocracia sindical.

Por último, las movilizaciones docentes actuales son las más importantes desde la transición, cuando se conquistaron buenas partes de los derechos, que desde hace décadas están siendo recordados, por un proceso que no ha distinguido entre siglas. A lo largo de veinte años, gobiernos de PSOE, PP, Sumar, ERC, Junts y Podemos han sido partícipes del deterioro, ya sea aplicando recortes directamente o renunciando a revertirlos. Si las mareas de la década pasada consiguieron frenar algunos de los ataques, no ha sido hasta las huelgas masivas actuales, que se ha empezado a abrir la posibilidad de revertirlos. La lección es clara, no se puede confiar en ningún gobierno en el actual sistema para garantizar los servicios públicos, solo en la clase trabajadora organizada y movilizada.

Más allá de la lucha, organizarse políticamente

Quienes formamos parte de Corriente Roja, además de ser maestras, docentes o personal educativo, estamos convencidas de que para conseguir que la educación pública sea verdaderamente universal, gratuita y de calidad, debemos organizarnos políticamente.

Entendemos que la causa de la destrucción de la educación pública, independientemente de quién gobierne, está arraigada en el sistema capitalista, y que toda la izquierda reformista, pese a los discursos y la buena voluntad, en última instancia gobierna reproduciendo esta lógica y defendiendo los intereses de los propietarios y dueños del mundo.



La lección es clara, no se puede confiar en ningún gobierno en el actual sistema para garantizar los servicios públicos, solo en la clase trabajadora organizada y movilizada.

Queda en evidencia, por tanto, que ninguna fuerza política con representación parlamentaria defiende la necesidad de expropiar los centros privados y concertados e integrarlos en la red pública, así como las empresas que se lucran con la actividad pedagógica y docente, para ponerlos bajo control de los trabajadores/as. Ante las crisis económicas o las guerras, estos gobiernos siempre elegirán recortar los servicios públicos y el gasto social antes que confiscar los beneficios millonarios del IBEX para garantizarlos. Así pues, solo a partir de la planificación democrática de la economía será posible garantizar, a largo plazo, una educación pública, gratuita y universal. Por eso impulsamos ser una palanca en la construcción de la unidad y la solidaridad en todo el movimiento obrero, al mismo tiempo que defendemos un camino estratégico anticapitalista y revolucionario. Porque solo con la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores en lucha, unidos y coordinados, defendiendo un programa socialista, tendremos las condiciones para luchar por la transformación social que tanto nos hace falta. Y confiamos en que en esta tarea nos acompañarán muchos de los docentes y maestras con quienes hoy compartimos asamblea.

“Hay que hablar de acabar con las colaboraciones público-privadas, que las empresas están para hacer negocio y no tienen que gestionar servicios públicos.”



Entrevistamos a Luis, personal de mantenimiento mecánico y Delegado sindical del MATS en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

¿Cómo piensas que está la privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid?

Ha habido un cambio cualitativo importante. En 2012 hicieron un ataque fuerte contra la sanidad: querían privatizar seis hospitales y 27 centros de salud. Aquello se paralizó gracias a la unidad de vecinas y profesionales en la Marea Blanca, y también en los tribunales. Ahora lo que están haciendo es privatizar poco a poco, por servicios.

Yo soy trabajadora del Hospital 12 de Octubre y nos han privatizado parte del mantenimiento, el

almacén general y, muy importante, la esterilización. Han metido a una empresa que lo está haciendo horriblemente mal. Nos estamos encontrando con cajas de instrumental a las que les falta material, o que llegan con restos de hueso o de sangre. Biberones que vienen con restos de material y que supuestamente están esterilizados. Hemos encontrado, y además lo hemos documentado y se lo hemos llevado a la Comunidad de Madrid, documentos que acreditan que esa empresa estaba esterilizando material de Sanitas o de clínicas privadas. Lo ha reconocido la Comunidad, pero no pasa nada: siguen haciéndolo. Se está privatizando poco a poco y acabando con todo lo público.

Dices que en el hospital donde trabajas se están produciendo privatizaciones, ¿crees que eso facilitará nuevas privatizaciones y la división de la plantilla?

Sí, es evidente. Lo he vivido en primera persona porque fui trabajadora del Hospital Puerta de Hierro hasta que se privatizó y se fue a Majadahonda. En principio íbamos a irnos todos como personal público; de repente eso cambió, se firmó a nivel sindical el traslado del personal sanitario como público y el resto como privado. Pero eso entra dentro del modelo de estos hospitales: Puerta de Hierro, Infanta Leonor, Infanta Cristina tienen todo el personal no sanitario privatizado. Y luego está el modelo Quirón —Valdemoro, Fundación Jiménez

nez Díaz—, donde todo el personal es absolutamente privado y que se están llevando el presupuesto de la Comunidad de Madrid.

Ahora ha salido una noticia de que la Comunidad les ha perdonado 71 millones de euros al grupo Quirón Salud. ¿Qué quieren conseguir? Potenciar la sanidad privada para que la sanidad pública no funcione y la gente acabe contratando seguros privados. Actualmente más de dos millones de personas en la Comunidad de Madrid tienen seguros privados. Lo que no fueron capaces de quitarnos en 2012 nos lo están arrebatando ahora de otra manera.

¿En tú opinión vamos hacia un modelo de privatización total, o crees que el modelo de colaboración público-privada les funciona porque genera mayor volumen de negocio para las empresas?

Yo creo que no van a ir a un modelo de privatización total porque no les interesa. Si la sanidad pública no funciona —que es lo que quieren conseguir: menos personal, más listas de espera—, al final la gente acaba yéndose a seguros privados. El negocio se mantiene mucho mejor así. Ya habéis visto el caso de Ribera Salud: los propios directores del centro dicen que van a gestionar las listas de espera de otra manera para hacer más negocio con ellas. Claro que les interesa que funcione como está funcionando. Y lo de siempre: después de privatizar servicios en 2012 y 2013, como los laboratorios, resulta que luego aparecen dirigidos por los mismos consejeros de sanidad que conseguimos que dimitieran.

¿Eso pasa en todos los servicios?

En todos los servicios. Es de sentido común: las empresas están para ganar dinero. No entiendo que se pueda hacer negocio con un servicio público. La sanidad, la educación, todos los servicios pú-

blicos tienen que ser públicos y no tienen por qué dar beneficio: tienen que dar un servicio. En cuanto entran las empresas privadas —llámalo privatización, externalización o colaboración público-privada— al final lo que haces es un negocio con el servicio público a costa del propio servicio. A nivel laboral, las compañeras que trabajan para estas empresas son mucho más precarias que nosotras, que ya somos precarias.

Actualmente la diferencia entre hospitales públicos y privados en Madrid es enorme: unos 33-36 públicos y 70 privados. ¿Cómo ves esa tendencia?

Es la política que está utilizando la Comunidad de Madrid. Estamos en la comunidad más rica del Estado español por PIB y al mismo tiempo en la tercera por la cola en inversión en sanidad pública. Y no solo pasa con la sanidad: planean hacer residencias de mayores y van a ser todas concertadas. De unas 500 o 600 residencias en Madrid, creo que solo 25 son públicas. Es una política sistemática de privatización, de no cubrir los servicios públicos.

¿Crees que el Estado podría hacer algo para revertir o frenar esta privatización, aunque las competencias estén transferidas a las comunidades?

Yo creo que podrían hacer varias cosas. Están preparando una ley que dicen que deroga la famosa Ley 15/97, que permite entre otras la entrada de las empresas en la sanidad pública pero creo que no la deroga realmente: solo ha cambiado el formato. Con esta Ley, la sanidad seguirá privatizándose igual. Y no es solo por la 15/97, sino porque hay directivas europeas que también lo permiten.

Yo creo que lo que deberían hacer es destinar presupuestos finalistas: que el dinero que el Estado transfiere a las comunidades para sanidad pública no pueda derivar-

se a la privada. Pero más allá de esas leyes, el mensaje tiene que ser claro y comprensible para la gente: hay que hablar de acabar con las colaboraciones público-privadas, explicar que las empresas están para hacer negocio y no tienen que gestionar servicios públicos. Eso la gente lo entiende perfectamente. También exigimos en el movimiento que como mínimo el 25% del presupuesto de sanidad vaya a atención primaria. Prevenir es mucho más barato que curar, pero aquí se potencia lo contrario: los hospitales, donde están el negocio de las farmacéuticas y de las empresas tecnológicas. Sería un avance importante, pero no la solución completa.

¿Cómo se debería organizar la lucha en defensa de los servicios públicos?

Luis: Creemos que tiene que ser una lucha desde abajo y desde la autoorganización. Los sindicatos y los partidos lo que tienen que hacer es apoyar, pero el motor tiene que venir de la gente. El ejemplo más claro fue la Marea Blanca que se puso en marcha cuando sacaron la ley de privatización, primero fueron las trabajadoras, y luego se unieron los usuarios y así es como se consiguió parar. Ahí está la clave. Ahora mismo en Madrid se ha creado Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid: colectivos de gente que se está organizando en los barrios y haciendo concentraciones cada semana, en Villaverde, Abrantes, Latina, la zona norte. Es lo que está consiguiendo que haya una movilización continuada. Estamos completamente de acuerdo en que hay que unificar las luchas, pero tiene que hacerse con trabajo desde abajo. No vale llegar y convocar una manifestación con un cartel lleno de logos si no hay trabajo previo en los barrios. Las cosas tienen que salir bien y ser potentes. Menos sopa de letras y más autoorganización.

Trabajadoras y trabajadores de la Comunidad de Madrid organizan una plataforma para luchar por la recuperación de la jornada de 35 horas

Javier

La jornada de 35 horas arrebatada por el gobierno de Rajoy a las y los trabajadores/as de las administraciones públicas, ha sido recuperada en todas las comunidades autónomas, menos 6 (Madrid, Catalunya, País Valenciá, Navarra, e Illes Balears), en la Administración General del Estado, así como en múltiples ayuntamientos.

Una de las Comunidades donde los empleados públicos no hemos recuperado dicha jornada es la Comunidad de Madrid, a pesar de ser en estos momentos la Comunidad más rica. Es más, no existen visos de que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso vaya a mejorar esta situación. Desde que Ayuso gobierna la tendencia siempre es la misma: agrandar la parte de los presupuestos derivados a empresas privadas a costa de las y los trabajadores/as públicas y de la calidad de las prestaciones que reciben las y los ciudadanos de la administración comunitaria.

Grupos de trabajadoras y trabajadores han decidido autoorganizarse, creando una plataforma para la recuperación de la jornada de 35 horas. Están hartos de tanta discriminación y son conscientes de las consecuencias beneficiosas de lograr recuperar dicha jornada: laborales (más descansos, mayor conciliación familiar y más empleo); asistenciales (mejor calidad asistencial). Al tiempo que no existe pretexto alguno para volver a ella: mejora durante años de la economía y vivir en una Comunidad que no deja de crecer.

Las razones para crear esta plataforma responden al intento de lograr la participación del máximo de

trabajadoras y trabajadores, más allá de sus ideas sindicales y políticas, y sin nadie que decida por ellas y ellos.

Esta plataforma ha iniciado una recogida de firmas y ha animado a las y los trabajadores del Hospital Doce de Octubre, de La Princesa y del Gregorio Marañón a participar con el movimiento de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid en las concentraciones que se han llevado a cabo en estos hospitales, cosa que han hecho varios

cientos de ellas y ellos, y organizando un cortejo propio en la manifestación del pasado 31 de mayo convocada por "Vecinas y Vecinos".

En los próximos meses las y los miembros de esta plataforma intentaran avanzar y extenderse por el conjunto de centros de trabajo y Consejerías e ir decidiendo y diseñando las acciones a realizar para lograr, aprovechando que estamos a un año de las elecciones autonómicas, que la jornada de 35 horas sea una realidad lo antes posible.



¿Por qué se deja morir y se desmantela lo público?

Jordi Jaime Sanz

Rescate y crecimiento del sector privado, y su transferencia en deuda pública, como fenómenos estructurales que explican hoy la privatización del sector público y su precarización.



Vemos como se deterioran los servicios públicos por falta de recursos, por la burocratización de los mismos y por una nefasta gestión del sector público. En realidad, todos estos fenómenos responden a un mismo proceso económico:

La burguesía lidera una gestión de lo público, a través de los políticos profesionales de los diferentes parlamentos, para beneficio propio. Perjudicar lo público para rescatar el sector privado, para mantener e incrementar su acumulación de capital, es la respuesta estructural de la burguesía hoy a la crisis actual del capitalismo.

La privatización responde al interés de la burguesía para expan-

dir el mercado de las empresas del sector privado, para precarizar el empleo público y aumentar su tasa de ganancia, y para absorber la deuda pública, que sirve para mantener esa tasa de ganancia, pero que amenaza con afectar la competencia de las grandes compañías privadas.

El neo-liberalismo no ha muerto: Las instituciones burguesas internacionales como el Banco Mundial (BM), la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Central Europeo (BCE), sirven a ese propósito, solo que cada una de ellas sirve a las compañías transnacionales que están detrás de ellas.

Los Estados, que respaldan y trabajan para sus compañías propias, están interesados en la financiación de esas instituciones internacionales con fondos públicos, así como de regar con ellos los beneficios de dichas transnacionales.

Los Fondos Next Generation y el rescate de la banca española a partir de la crisis de 2008, son buenos ejemplos de cómo la UE potencia el sector privado a través del presupuesto público y cómo se transfiere la deuda privada del sector privado a deuda pública.

Como vemos actualmente, la UE aporta a través de la Comisión Europea los Fondos Next Generation que salen de la población de sus

Estados miembros y que sirven básicamente para que las empresas y grandes compañías europeas puedan digitalizarse y hacer su transición hacia la mal llamada “economía verde” sin que eso suponga ningún menoscabo para su tasa de ganancia. Es decir que, con fondos públicos, se mantiene el beneficio de gran parte del sector privado europeo, ensanchándose los márgenes de beneficio para bancos y fondos de inversión y trasladándose el coste de dicha transición a dicha población, pues dicho coste se sufraga, mención aparte de los ingresos provenientes por la imposición a la clase trabajadora europea, con medidas como los recortes y el mantenimiento o incremento de la precarización del sector público.

Muchos de los sectores privados en la economía burguesa, como se pudiera ver también con el rescate bancario en el Estado español a partir de la caída de Lehman Brothers en 2008, no podrían sobrevivir a su crisis y crecer sino fuera por el gasto público. Dicha expansión del sector privado gracias al gasto público lo podemos ver, por ejemplo, en las licitaciones de obra pública en el Estado español pero también vemos dicha expansión del sector privado a través de la financiación con fondos públicos de los sectores que sirven a los fines geo-estratégicos de los Estados europeos y para mantener sus mercados fuera de sus fronteras, cuya expresión es el gasto militar.

En efecto, el gasto público en licitación de obra pública en el Estado español ha pasado de 10.849,77 millones de euros en 2020, a 24.447,43 millones de euros en 2024, es decir, aproximadamente un 150% más.

El gasto público en defensa, que se lleva 12.317 millones en 2025 del gasto público estatal total, aumentando un 62,58% respecto a 2017, ha hecho lo propio en su sector.

Tanto el sector de la construcción como el militar es alimentado con fondos públicos generados, como se puede evidenciar en el

caso español, mayoritariamente por la clase trabajadora y en menor medida también, por las demás clases populares.

Evidentemente financiar al sector privado a través del gasto público, tanto para rescatarlo como para mantenerlo y expandirlo, contribuye a generar una enorme deuda pública que ya solo con sus intereses liquida una buena parte de los ingresos del Estado que podrían ir dirigidos a solucionar problemas de gran envergadura, como la vivienda.

Cuando el gobierno dice que la deuda pública en el Estado español se ha reducido, simple y llanamente miente porque si bien su ratio con respecto al PIB ha disminuido un poco en estos últimos años por el crecimiento de este último, en términos absolutos casi se ha multiplicado por cuatro des de 2008 hasta 2025.

La deuda pública española, en ese sentido, ha pasado de ser de 440.621 millones de euros en 2008 a 1.698.225 millones (más de billón y medio de euros) este pasado 2025, es decir, un incremento del 285%, y no ha dejado de crecer, año tras año, en toda esta serie histórica

Evidentemente, y como hemos visto, cuando los ingresos del Estado no alcanzan para pagar a los sectores privados como los que hemos hablado, el Estado se endeuda, pero esa deuda solo se absorbe (se retorna a sus propietarios, normalmente bancos), allí donde no afecta al gran capital, es decir, se liquida la deuda donde acabar con ella no supone un menoscabo para la tasa de ganancia de las grandes compañías.

Para dejarlo más claro, estos mecanismos de recuperación, mantenimiento y expansión de las grandes compañías, no sólo suponen un expolio de la clase trabajadora principalmente, y de las demás clases populares, en menor medida, porque suponen un traspase de ingresos, obtenidos con impuestos de esas clases, a esas

compañías, sino que cuando con los ingresos de las clases trabajadoras y populares no es suficiente para pagar los costes de expansión de las compañías privadas y para pagar la deuda pública que ello genera, los recortes y las privatizaciones se ponen al orden del día para limpiar esa deuda.

Efectivamente, la deuda pública genera ciertos desajustes (aumenta las dificultades de financiación del sector privado al aumentar los tipos de interés, por lo general genera inflación, devaluación de la moneda, desequilibrios en la balanza comercial, etc.), cosas que inciden especialmente en la competencia internacional de las grandes compañías de los Estados que asumen esa deuda, por eso es tan fundamental para la burguesía reducir la deuda. Pero claro, eso lo han de hacer los políticos que están a su servicio, en el sector público, allí donde no afecta sino beneficia la tasa de ganancia de dichas compañías.

Las políticas de la Unión Europea y de los diferentes gobiernos del Estado español, en resumen, para seguir con la lógica de este sistema y la acumulación del capital de las grandes compañías, entidades financieras y banqueras, a las cuales sirven, están detrás de la privatización del sector público, de su precarización, del empeoramiento de su calidad y eficiencia (perdida de calidad debida también a la precarización del empleo público) y de los recortes que padece toda la sociedad, principalmente la clase trabajadora. Y es precisamente porque no pueden salirse de ese marco actual del capitalismo lastrado por la deuda, que dicha privatización y precarización es hoy en día un fenómeno estructural.

Las estrategias y las excusas para privatizar el sector público. El caso de la colaboración público-privada

Jordi Jaime Sanz

Con la privatización del sector público no sólo se transfieren unos activos de las clases populares, mayoritariamente financiados por los trabajadores/as, a la burguesía, sino que, además, con dicha privatización, la burguesía consigue que más dinero público fluya constantemente hacia el sector privado. ¿Por qué? Porque cuando se privatiza un servicio público, como se han de cubrir unas necesidades humanas que han quedado insatisfechas al privatizar y que normalmente no son solventes, pero al mismo tiempo se quiere mantener la titularidad privada de esos servicios y esos activos, esas necesidades insatisfechas no solventes presionan y sirven de excusa para regar con dinero público ese sector privado nacido al calor de las privatizaciones.

Podríamos encontrar muchos ejemplos de colaboración público-privada en todos los problemas que abre el capitalismo, que sirve para socializar los costes de estos problemas y beneficiar a la parte de la sociedad que los produce, y que a la vez sirve como estrategia para ir privatizando el sector público de forma encubierta. Pero el problema es que la solución de la derecha y la supuesta izquierda a la cuestión de la privatización, la colaboración público-privada, supone un doble perjuicio a la clase trabajadora en su conjunto (más allá de que algunas familias vulne-

rables de clase trabajadora salgan beneficiadas). No solo porque supone pasar dinero de la clase trabajadora en su conjunto, y también de parte de las clases populares, a la burguesía acaudalada, sino también porque, al mantener esa fiscalidad regresiva, produce una fractura en la clase trabajadora que beneficia claramente a las opciones políticas de más a la derecha, debido a que la población más vulnerable, que concentra la mayoría de necesidades no solventes, suele ser migrante. Ello, pese a que los migrantes, en una más que considerable mayoría de ocasiones, son una parte minoritaria en el consumo del llamado «Estado del Bienestar», permite agitar a la extrema derecha el mantra de que los trabajadores «autóctonos» pagan la vivienda, la sanidad y la educación a esa población, cuando los migrantes, que aportan, en su conjunto, al sistema de la seguridad social etc. más de lo que reciben, también pagan, a través de la colaboración público-privada entre otras vías, a la burguesía acaudalada.

En ese sentido, las políticas «progresistas» de la socialdemocracia actual y esa supuesta izquierda, que consisten en esa colaboración público-privada y cuyo contenido real es la potenciación de negocios privados, son una máquina de fabricar votos para la derecha extrema (PP) y la extrema derecha (VOX).

Por otro lado, el nepotismo, la alta burocratización de los servicios, el parasitismo en la función pública, la corrupción en general, inherente al propio sistema político burgués y a la administración pública, inevitable en un sistema económico burgués, pues contra más centralizado y más concentrado está el capital, más inexorable es la cooptación por la burguesía de los cargos públicos a sus intereses (piénsese, por ejemplo, en las puertas giratorias): todos esos factores que se atribuyen a la mala gestión pública, cuando debieran ser atribuidos al propio sistema económico de la burguesía y a su liderazgo en el sector público, pudren un sector público ya mermado por escasez de recursos y por su elevado coste burocrático. Esto hace que, aunque aumente la partida presupuestaria destinada a él, dichos recursos no vayan a parar muchas veces a remediar sus puntos débiles, sino a sostener su burocracia; cuando no, se lo deja morir por inanición, sin invertir fondos públicos en él, con el interés de privatizarlo a precio de saldo.

En resumen, la excusa de la mala gestión pública utilizada por la burguesía para privatizar, léase apropiarse de, un servicio público, léase los ingresos de los trabajadores principalmente, debería ser achacada a sus sirvientes políticos y, por lo tanto, a la misma clase burguesa.

“No sirve de nada pedir más salario o mejores condiciones en un planeta inhabitable”



Entrevistamos a Juan, Bombero forestal de Andalucía.

En los últimos años hemos asistido a procesos de movilizaciones de los bomberos forestales en varias CCAA ¿Qué puedes contarnos de su situación y lucha?

La profesión está sometida, por lo general, a una gran precariedad. Afortunadamente, somos bastante peleones. La pasada campaña de alto riesgo terminó con una movilización estatal en Madrid, en octubre, que reunió a varios miles de compañeros y compañeras de los cuatro puntos cardinales. Desde entonces hay un reguero de luchas que no ha parado en ningún momento. En Madrid llevan más de 1000 días de huelga, que se dice pronto. Hace apenas unas semanas también nos movilizamos los de Andalucía. En Castilla y León durante estos meses han participado

en marchas por las zonas afectadas por los terribles incendios de 2025, seguramente allí tienen la peor situación de todas. La situación es tan caótica que, por una disputa entre las empresas a las que se ha privatizado el servicio y la Administración, ahora mismo casi mil compañeros ni siquiera han podido incorporarse a su trabajo.

El año pasado batimos récords de incendios y este año ya despunta muy muy feo. Combatir estos incendios es siempre muy difícil. Pero es que hacerlo privatizados, con personal temporal recién contratado, con condiciones laborales pésimas, con carencias humanas y materiales, sin una formación y un entrenamiento a lo largo del año profesional... lo hace todo mucho peor.

La nuestra ya no es ni una lucha por condiciones laborales o seguridad en el trabajo, sino es ya una

reivindicación porque las laborales de prevención y extinción de incendios forestales puedan ser lo más eficaces posibles. Por nosotros, por la población y por nuestra naturaleza y montes.

¿Se notan las consecuencias del cambio climático en vuestro trabajo?

Indudablemente. En estos días hemos sufrido un incendio en pleno corazón de Doñana, espoleado por unas temperaturas propia del verano. El problema es que aún estamos en mayo. Los incendios forestales alimentados por el cambio climático no son una predicción de futuro, son ya una realidad incontestable. Lo peor es que se van a seguir agravando, como muchas adversidades medioambientales. La única pregunta es si van a ser un desastre incontrolable o podremos frenar a tiempo antes de que sea demasiado tarde.



Los incendios forestales alimentados por el cambio climático no son una predicción de futuro, son ya una realidad incontestable. La única pregunta es si van a ser un desastre incontrolable o podremos frenar a tiempo antes de que sea demasiado tarde.

¿Cuál es el papel de los trabajadores/as públicos/as en la lucha contra las consecuencias de la catástrofe ecológica?

Creo que es importante incorporar esta dimensión a nuestras luchas. No se trata únicamente de pedir un poquito más de salario o unas condiciones de trabajo un poquito mejores. Eso no sirve de nada en un planeta inhabitable o delante de incendios monstruosos. Hay que salir del sindicalismo de carril estrecho e implicarnos en la lucha ecologista. Muchas veces estamos tan enredados en las pequeñas reivindicaciones más urgentes que se nos olvida lo más importante. Nuestro testimonio y conocimiento desde la primera línea de los efectos del cambio climático nos hace esenciales como punta de lanza de la población en su conjunto.

A nuestro favor tenemos ser una profesión bastante reconocida por la población, tenemos la posibilidad de concienciar sobre las transformaciones que están sucediendo. Necesitamos aliarnos con los movimientos sociales preocupados por la crisis ecológica en curso, hacernos parte de ellos, nutrirlos con nuestra visión y aprender a su vez de ellos.

¿De quién es responsabilidad que se siga profundizando la crisis ecológica?

Se suele decir que es responsabilidad de todos. Y en parte es cierto, todos y todas tenemos responsabilidad con nuestros actos cotidianos. Yo animo a ser tan responsables y coherentes como podamos. Pero plantearlo así es hacer trampas, es responsabilidad de todos, pero no en la misma proporción. La desigualdad en nuestra sociedad es obscena, y eso se refleja en el impacto que generamos cada cual. ¿O es lo mismo alguien que vive compartiendo piso y llega ahogado a fin de mes que los megaricos que cogen un jet privado cada dos días?

La desigualdad es tan brutal que cuesta dimensionarla. Voy a poner sólo un dato encima de la mesa para no inundar de cifras el debate. Según Oxfam, el 1% de la humanidad contamina más como los 2/3 más pobres de la humanidad en su conjunto. Ahí se encuentra el quid de la cuestión.

¿Cuáles son las medidas que se deberían aplicar para frenar la catástrofe ecológica?

Es difícil desarrollar una gran argumentación en un espacio breve, así que voy a ir directo a lo que creo que es esencial. Aunque suene muy maximalista, te diría que necesitamos acabar con el capitalismo. Llevamos unos 30 años de cumbres climáticas internacionales, de discursos sobre desarrollo sostenible y de "economía verde", pero seguimos deslizándonos por el tobogán hacia el desastre. Aplastando cualquier iniciativa ligada a la sostenibilidad, el capital sigue girando y acumulando, machacando lo que haga falta para seguir creciendo sin límite. Los grandes capitalistas del mundo han demostrado sobradamente estar dispuestos a llevarnos a todos por delante para seguir sumando ceros en su ya infinita cuenta corriente.

La economía es hoy por hoy una rueda ciega que gira y gira siempre buscando que sigan acumulando ganancias, eso marca su brújula.

Y los gobiernos de todo el mundo acompañan sin excepción. Creo que hay que cambiar completamente el paradigma. Necesitamos planificar la economía, hacerlo para cubrir las necesidades humanas sin sobrepasar las capacidades del medioambiente. Estamos tan acostumbrados al capitalismo extremo que esto suena completamente utópico, pero lo que de verdad es irreal es pensar que vamos a poder cambiar de rumbo manteniendo el orden económico, social y político actual.

Creo que sería posible un mundo donde el conjunto de la población pueda vivir dignamente, mejor que ahora diría, respetando los límites finitos de nuestro planeta y sus recursos naturales. Pero para eso necesitamos acabar con el capitalismo, con la guerra, con la desigualdad extrema y la acumulación de riqueza y poder. Un mundo sostenible es necesariamente un mundo más equitativo y democrático, en el que el conjunto de la población tenga el poder repartido y en sus manos; especialmente, la clase trabajadora, que somos quienes al fin y al cabo producimos y distribuimos todo lo que se fabrica.



Un mundo sostenible es necesariamente un mundo más equitativo y democrático, en el que el conjunto de la población tenga el poder repartido y en sus manos; especialmente, la clase trabajadora.

¿Prioridad nacional o prioridad de clase?

ñol de los servicios sociales por personas extranjeras no pasa del 12,5%. De las 798.312 personas que cobran ayudas como el IMV por ejemplo, el 82,5% son españolas y los migrantes solo cobran el 28% de las rentas de inserción autonómicas.

Prioridad nacional o prioridad de clase

El PP y VOX aprovechan el avance de la ultraderecha a nivel internacional para cebarse contra la población migrante en el Estado español, señalándoles como principales causantes de la precarización de los servicios públicos y el retroceso en la calidad de vida de los y las nacidas aquí, y el aumento de la inseguridad. Pero no dicen que la crisis de vivienda es generada por los fondos buitres y bancos que acaparan y especulan con un derecho tan básico como es la vivienda. Tampoco dicen nada de que los bancos deberían devolver los más de 64,000 millones de euros con los que el Estado les rescató en la crisis de 2008-2009. Que los retrocesos en el poder adquisitivo se deben a los bajos salarios y a los cierres de empresas por parte de las grandes corporaciones y entrando al tema de servicios públicos no dicen que el abandono Estatal y en consecuencia la privatización de estos es lo que lleva a que no funcionen.

Para no ir tan lejos, en los últimos cuatro gobiernos en el Estado Español, desde José Luis Zapatero (PSOE), pasando por Mariano Rajoy (PP) hasta el de Pedro Sánchez, se han realizado entre 150,000 y 230,000 contratos con empresas privadas (sumando Administración General del Estado, CCAA y

entidades locales). Entre el 45% y el 55% de estos, son contratos de servicios públicos, sobrepasando los contratos en sectores como las obras y suministros. En términos económicos eso representa un 11% del PIB, o sea unos 70,000 millones de euros anuales. Esto nos da una idea de la cantidad de las ganancias que obtienen las empresas privadas a costa de servicios que deberían mejorar nuestras condiciones de vida.

Si hablamos de reformas fiscales que graven las grandes fortunas para financiar los servicios públicos, el análisis cambia por completo. Tomemos como ejemplo a Florentino Pérez, con un patrimonio de 3.100 millones de euros y una retribución anual de 9 millones como presidente de ACS. Desconocemos cuánto tributa exactamente, ya que esas cifras están amparadas por la ley de protección de datos. Lo que sí sabemos es que patrimonios como el suyo quedan sujetos al Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas y al Impuesto sobre el Patrimonio, con una cuota neta de 3 millones de euros anuales, una cifra claramente desproporcionada respecto a lo que genera un patrimonio de esa magnitud.

Hay que añadir que ACS —Actividades de Construcción y Servicios— registró solo en el primer trimestre de 2026 unos ingresos de 12.300 millones de euros, sien-

do una de las empresas con mayor volumen de contratos públicos en el Estado español ejecutados a través de filiales como Dragados, Tessa o Rover Rail.

ADIF la empresa administradora de infraestructura ferroviaria, es con mucha diferencia el principal cliente estatal de ACS, recibiendo constantemente licitaciones masivas vinculadas a la Alta Velocidad y cercanías, también tiene contratos con el mantenimiento de carreteras y aeropuertos, lo cual al año deja un beneficio de entre 700 y 1,200 millones de euros a la corporación del sr. Pérez. Si personas como Florentino Pérez o Amancio Ortega, pagaran los impuestos equivalentes, no se beneficiarían de la privatización de los servicios públicos, estos serían de calidad y habría cantidad suficiente para todas las personas. En otras palabras y, en resumidas cuentas, la crisis de servicios públicos y de vivienda, deberían pagarla los ricos.

Este tipo de datos son los que Abascal, Feijoo y los medios de la derecha rancia ocultan a la clase trabajadora en el Estado español para poner a pelear a pobres nacionales, contra pobres extranjeros. Porque de fondo saben que la lucha no es de nacionales contra extranjeros, sino, una lucha de clases encarnizada, ricos contra pobres, patrones contra trabajadores/as, explotados/as contra explotadores.

La lucha contra la privatización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Alcalá del Río (Sevilla)



Entrevistamos a Rosario, Magdalena y Sandra. Tres trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Alcalá del Río que llevan más de diez años resistiendo la privatización de un servicio público esencial con el que se atiende a personas en situación de dependencia. El suyo es un conflicto por unas condiciones dignas de trabajo, estabilidad en el empleo y contra la precariedad y discriminación laboral que sufren los sectores laborales relacionados con los cuidados que son siempre los más feminizados.

La suya es una lucha por la remunicipalización del servicio, enfrentando la política privatizadora del gobierno de turno, primero bajo el PSOE y ahora bajo un gobierno de Izquierda Unida, que ha adjudicado el servicio anteriormente en manos del consistorio, a la empresa Ecilimp S.L. Una privatización que afecta al empleo y a las condiciones laborales de estas trabajadoras, así como a la calidad del ser-

vicio. Hablamos con ellas sobre el conflicto, sus causas y lo que está en juego.

¿Cómo explicaríais brevemente el conflicto a alguien que no lo conoce?

Llevamos luchando desde 2014 que gobernaba el PSOE. La nuestra es una lucha por un sueldo digno y unas condiciones dignas de trabajo para todas las trabajadoras, sin discriminación, ya que sufríamos tres sueldos diferentes en una misma categoría. Eso se denunció a la Inspección de Trabajo y se ganó.

En esa lucha por la igualdad, siempre hemos querido que las compañeras de la bolsa fueran también personal del ayuntamiento. Pero desde el consistorio, nunca quisieron que formaran parte de la plantilla del Ayuntamiento.

¿Y la privatización? ¿Cómo empezó?

En un principio, el protagonismo fue del PSOE, cuyo papel era intentar que se devaluase el servicio,

que decayera, dejándolo posteriormente a Izquierda Unida en bandeja, para poder llevar a cabo la licitación. Esto ha sido un proceso y un trabajo de años. Lo mismo que nosotras hemos estado luchando durante muchos años en contra de que se privatice, ellos han estado luchando por todo lo contrario.

A la pregunta de que desde cuándo empezó el proyecto de privatización con Izquierda Unida, yo creo que desde el momento en que todas empezamos a reclamar nuestros derechos, y que no éramos solo una caja registradora que ingresaba dinero al ayuntamiento. Cuando empezamos con las denuncias y a ganar juicios.

¿Cómo os afecta la privatización a las trabajadoras?

Supone una disminución de nuestros derechos económicos, como los días de asuntos propios; y la aprobación de las llamadas «horas monedero», que todas las empresas utilizan como les viene bien.

Para las trabajadoras supone un retroceso en derechos fundamentales como son la conciliación laboral

Ahora mismo nos regimos por el convenio provincial, pero se está ya negociando un convenio nuevo que empeorará aún más nuestras condiciones: menos salario, menos días de asuntos propios sin derecho ni para ir al médico. Muchas pasarán a cobrar unos 700 euros.

Por otro lado, sigue existiendo una bolsa del ayuntamiento de 166 personas. ¿Dónde están esas 166 trabajadoras que están esperando a ser llamadas? Son profesionales, son compañeras que han estado trabajando para el ayuntamiento atendiendo a los usuarios durante muchísimos años. Y ahora mismo ni las están llamando. Están trayendo personal de otra parte y prefieren decir que no tienen personal, antes de contratarlas.

¿Y a los usuarios?

Hay usuarios/as que no tienen ningún familiar y tienen asignadas unas cuatro horas y les han dicho que les van a rebajar a una hora. Dime tú en una hora cómo los bañas, cómo les dejas la comida hecha, etc.

Yo lo máximo que he hecho en 27 minutos es bañar a la persona, recoger el baño y una cama, y salir pitando, siempre llegando tarde a todos lados. O la bañas o la afeitas. Las dos cosas no puedes. Y no es solo el desgaste físico: es también emocional. Caemos más en depresiones debido a que sufrimos ansiedad por llegar a los sitios, ansiedad por hacer el trabajo en condiciones... el día que dejas a una persona sin haberla dejado como a ti te gustaría, esa carga te la llevas a casa.

¿Veis esto como el único conflicto de privatización en Alcalá del Río?

No, lo que ocurre con nosotras en el servicio de ayuda a domicilio, creemos es la antesala de lo que va a ocurrir con otros servicios como jardinería o limpieza. Esto va a ser progresivo, no va a pararse solo con nosotras. Todo lo que son servicios

se van a terminar privatizando. De hecho, no hay más que ver que desde que ya no hay tantos programas públicos como había antes, como el Plan Joven. Ya no se están dando esos planes.

¿Cuál ha sido la postura de los partidos del ayuntamiento?

Lo que ha hecho Izquierda Unida es continuar el trabajo que abrió el PSOE. Por eso el PSOE no puede poner objeción a algo que ellos ya plantearon y pusieron sobre la mesa.

PP, PSOE, Izquierda Unida: los tres están unidos como hermanos primos en esto de acabar con los servicios públicos aquí en Alcalá.

¿Cuál creéis que es el camino para defender lo público?

El único camino es la unión de todos los trabajadores y trabajadoras, los familiares, los usuarios, y echarnos a la calle. Aquí no se trabaja hasta que esto se resuelva. Y si paramos un país, te digo yo que lo solucionamos de golpe.

Que se cumplan todas las leyes que ya existen. La Junta ha dicho

«yo te doy el dinero y tú haz lo que quieras». No: habéis hecho un servicio público porque hay personas que lo necesitan, y lo primero que tenéis que mirar es que esos servicios se estén cumpliendo. Este ayuntamiento no puede decir tampoco «hoy no doy las horas, pero el dinero me lo quedo». Necesitamos control.

Hay quien dice que vuestra lucha va contra Izquierda Unida. ¿Cómo respondéis?

Estamos cansadas de que se nos diga que vamos «contra Izquierda Unida» o «contra Maíllo». Lo que nosotros queremos que se entienda es que no vamos contra nadie. Defendemos un servicio público y los derechos que estamos perdiendo.

Si en vez de gobernar Izquierda Unida y PSOE antes, gobernase la derecha o la ultraderecha, ¿se hubiera callado la gente? No: todo el mundo estaría en la calle. Pues nosotras decimos: ¡Gobierne quien gobierne, lo público se defiende!



La destrucción de lo público, un arma para oprimir y dividir a la clase

Laura R. y J. Martínez

Cuando hablamos de servicios públicos, solemos hablar de dinero: de cuánto se recorta, de adónde va el presupuesto, de cuántos millones engorda Quirón o CLECE mientras las listas de espera se alargan. Ese análisis es correcto y necesario. Pero hay una dimensión que se queda fuera si nos limitamos a los números: la destrucción de lo público no solo empobrece a la clase trabajadora en abstracto. Golpea de forma desigual según el género, el origen y la situación laboral de cada persona, y tiene consecuencias que van mucho más allá del bolsillo. Los servicios públicos no son solo un derecho económico: son el terreno donde se decide quién carga con el peso del trabajo de cuidados y unos de los pilares para el combate estructural al machismo.

Quién paga la privatización y los recortes sociales: género, clase y origen

El capitalismo necesita que los trabajadores y trabajadoras descansan, se alimenten, se cuiden cuando enferman, críen a sus hijos e hijas. Todo ese trabajo —invisible, no remunerado, imprescindible— se llama trabajo para la reproducción social, que es la actividad física, emocional y material que hace posible dicha reproducción social de la fuerza de trabajo. La pregunta política es: ¿quién lo hace y a qué coste?

Hay dos respuestas posibles. La primera: una red de servicios públicos que socialice esas tareas —guarderías, atención sanitaria universal, residencias dignas, servicios sociales— y permita que el



conjunto de la clase trabajadora acceda a ellos con independencia de su salario. La segunda: que esas tareas se realicen en el ámbito privado del hogar, especialmente por las mujeres, de forma gratuita. El capitalismo en crisis empuja sistemáticamente hacia la segunda opción: recortar lo público es, en el fondo, privatizar la reproducción social de la fuerza de trabajo.

Que la responsabilidad social sobre ese trabajo recaiga sobre las mujeres no es casualidad. En el capitalismo son las mujeres quienes lo absorben. No porque sea natural, sino porque a través del machismo, se ha construido esa división social como norma. A pesar de los derechos conquistados, hoy en el Estado español las mujeres dedican en promedio el doble de horas semanales que los hombres a los cuidados y tareas del hogar. El 21,4% trabajan a tiempo parcial,

frente al 6,8% de los hombres, y la brecha salarial es del 16,6%, unos 430 euros de media al mes. La privatización y el recorte en los servicios públicos de atención y cuidados refuerzan esa división: devuelven al ámbito doméstico lo que durante décadas de conquistas obreras había sido arrancado y convertido en derecho colectivo durante la transición, delante de una burguesía que para evitar una mayor movilización tuvo que entregar concesiones. Pero bajo el capitalismo, especialmente en crisis, estas tareas son igualmente realizadas en su mayoría por mujeres, en condiciones de enorme precariedad laboral.

La privatización y las políticas de austeridad se cobran un precio diferente según la combinación de clase, género y origen. Una mujer trabajadora que pierde o ve reducido el servicio de ayuda a domicilio

para su familiar mayor, no tiene las mismas opciones que quien puede contratar a una empleada de hogar —frecuentemente migrante, con contrato precario o sin él—. El 70% de los puestos temporales y precarios en la administración están ocupados por mujeres, concentrados en sanidad y educación. En el sistema de dependencia, el 72,3% de las personas cuidadoras no profesionales son mujeres, y más del 80% de quienes trabajan profesionalmente en ese sistema también lo son. Las mujeres migrantes sostienen la reproducción social cuando el Estado se retira, y son al mismo tiempo las primeras en sufrir la degradación de los servicios cuando los necesitan para sí mismas.

Defender lo público es una lucha para unir a toda la clase trabajadora

La clase trabajadora es diversa y está dividida por las opresiones, que enfrentan unos sectores contra otros. La lucha por los servicios públicos es uno de los terrenos donde esa división puede romperse, porque el ataque golpea a todas al mismo tiempo y desde ángulos distintos.

Cuando se externaliza un servicio de ayuda a domicilio, pierde la trabajadora que ve degradarse su convenio, pierde la persona mayor que recibe el servicio, y pierde la clase trabajadora especialmente las mujeres. El capital gana en los dos extremos de esa cadena. Las trabajadoras de Alcalá del Río, las enfermeras del 12 de Octubre, las docentes con el sueldo congelado en Cataluña no son conflictos separados. Son expresiones distintas de la misma contradicción: los servicios públicos son la trinchera donde se disputa quién carga con los costes de la reproducción social. Y esa carga, en el capitalismo, la llevan las mujeres.

La conexión entre privatización y violencia machista es más directa de lo que parece. Las trabajadoras de la Red contra la Violencia

de Género de Madrid —que fueron a la huelga este 25-N exigiendo la remunicipalización del servicio— lo explicaban con claridad: cuando una mujer pide ayuda para salir de una situación de violencia, si no es considerada en situación de alto riesgo, tiene que esperar dos meses para ser atendida. Durante ese tiempo sigue expuesta y muchas sufren nuevas agresiones que podrían haberse evitado.

A esto se suma que la precariedad salarial ata a muchas víctimas a sus maltratadores —no por dependencia emocional, sino porque no tienen alternativa económica—, y que sin vivienda pública algunas mujeres vuelven con el agresor al agotar el plazo en un centro de emergencia. La privatización de los servicios de atención a la violencia machista no es un problema burocrático. Es un problema que cuesta vidas.

Sin socializar los cuidados la igualdad real es imposible

Defender y rescatar los servicios públicos existentes es imprescindible. Pero no es suficiente. Incluso cuando el Estado del Bienestar fue más robusto, la reproducción social siguió descansando de forma desproporcionada sobre las mujeres. El problema no es solo de cantidad de recursos, sino de qué tipo de sociedad los organiza y con qué lógica. Aunque tengamos acuerdo con un mayor reparto de las tareas domésticas y de cuidados dentro del hogar, porque ello contribuye a una mayor igualdad, la solución de fondo es luchar para que la responsabilidad sea social

Para acabar con las raíces materiales de la opresión de género hace falta ir más lejos: socializar todos cuidados. Eso significa guarderías públicas y gratuitas para toda la clase trabajadora, comedores colectivos accesibles, lavanderías sociales, centros de día y residencias dignas con gestión

pública. No como servicios residuales para quien no puede pagar, sino como derechos universales que arranquen de raíz la división entre trabajo productivo —el que cuenta, el que se paga— y trabajo reproductivo —el que sostiene todo lo demás, pero se hace invisible.

¿Puede el capitalismo llegar a eso? La evidencia histórica dice que no. Cada vez que la crisis aprieta, los cuidados son lo primero que el capital devuelve al hogar y con ello las mujeres trabajadoras son las primeras en salir del mercado laboral. Pasó con los recortes de Zapatero, con la austeridad de Rajoy, y la lógica de la colaboración público-privada que hoy defiende el PSOE no rompe con ese mecanismo: lo administra. La opresión de género, en el capitalismo, no es un residuo del pasado que se corregirá con más reformas. Es funcional al sistema: mientras el capital pueda extraer trabajo gratuito de las mujeres para sostener la reproducción de la fuerza de trabajo, no tiene ningún incentivo para eliminarlo.

La conclusión es clara: mientras sigamos en el capitalismo, la opresión de género tiene suelo firme donde sostenerse. Un sistema que utiliza el trabajo gratuito de las mujeres para reproducir la fuerza de trabajo no va a socializar los cuidados, igual que no va a rescatar los servicios públicos. Las reformas pueden mejorar condiciones, pero no eliminan la raíz.

Si defender lo público, forma parte de la lucha contra el machismo, combatir la opresión de género en todas sus formas, es igualmente una parte vital de la lucha contra el capitalismo.

Por eso las trabajadoras que hoy luchan por la remunicipalización de un servicio de ayuda a domicilio o contra la externalización en un hospital, están peleando, aunque no siempre se nombre así, por una sociedad donde la vida valga más que el beneficio.



Por un programa de rescate de los servicios públicos



Alexandra Guerrero

En los últimos años los/las trabajadores/as públicos son el sector que más huelgas ha protagonizado, pero las luchas acostumbra a quedar encerradas por el corporativismo y divididas por las competencias autonómicas, lo que genera una disparidad acuciante en los distintos territorios tanto en la calidad del servicio como en las condiciones laborales de quienes los sostienen. Frente a ello es imprescindible la elaboración de un programa común que permita unificar las luchas de los trabajadores/as y usuarios/as.

Luchar consecuentemente por unos servicios públicos verdaderamente de calidad pasa por exigir la aplicación inmediata de un programa

de rescate de lo público que aumente de forma extraordinaria los recursos, que remunicipalice y estatalice todos los servicios externalizados y privatizados y a sus plantillas y que dignifique las condiciones laborales de los/las trabajadores/as, empezando por estabilizarlos/as. Dicho programa nace de las necesidades más apremiantes que la clase trabajadora y la inmensa mayoría del pueblo hemos puesto en la calle, masivamente, los últimos años. El programa, por tanto, responde a un intento de sistematización de esas medidas aunque cada sector tenga sus particularidades.

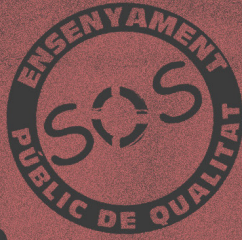
¡Recuperar la gestión pública de los servicios externalizados, inyectar fondos de forma extraordinaria

y estabilizar a los/las trabajadores/as!

El plan que proponemos incluye la inmediata municipalización, estatalización o nacionalización de todos los servicios privatizados o externalizados expropiándolos sin indemnización para recuperar así su gestión pública. Desde los Servicios de Atención Domiciliaria hasta los servicios de limpieza y recogida de residuos. Dicho plan debe contemplar la integración de todos ellos en la red de recursos pública bajo control de los/las trabajadores/as, tanto en la planificación como en la gestión. ¡No hace falta construir más escuelas u hospitales, sino pasar a manos públicas los que hoy son concertados o privados!



SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD UNIVERSAL



Defendemos una inyección extraordinaria de fondos públicos para rescatar lo público y asegurar unos servicios de calidad, ya sea la sanidad, la educación, el sector social, bomberos, el transporte, los cuidados o las pensiones. Es necesario recursos para bajar los ratios de las aulas, reducir las listas de espera, invertir en la mejora y mantenimiento de la red pública de transporte y para garantizar un sistema público de pensiones ligado a los Presupuestos Generales del Estado.

Incrementar la financiación de lo público no solo exige redistribuir los fondos públicos en los Presupuestos Generales del Estado, reduciendo el presupuesto militar, cance-

lando los contratos con la industria militar israelí o eliminando gastos innecesarios como la partida de la Casa Real, sino que requiere redistribuir la riqueza y aumentar la carga fiscal a quienes más tienen. Por ello, el gobierno debe aplicar impuestos extraordinarios a las grandes fortunas del país e intervenir los beneficios empresariales. Es la única forma de velar para que los servicios públicos puedan ser 100% públicos, gratuitos y de calidad. Ello implica, además, revertir los recortes que gobiernos de distintos colores han llevado a cabo desde la crisis del 2008, contratar más personal para desaturar los servicios e invertir en recursos e infraestructura.

Dignificar las condiciones laborales de los/las trabajadores/as públicos/as y la calidad de los servicios pasa, en primer lugar, por la estabilización de todos/as ellos/as para acabar con la temporalidad. Además, muchos de los servicios están externalizados, mientras no se estatalicen, luchar contra la precariedad exige defender la derogación completa de las dos últimas reformas laborales, la de Rajoy de 2012 y la del gobierno del PSOE-Unidas Podemos de 2021 que garantiza la tranquilidad de la patronal preservando, en lo sustancial, la Reforma de 2012, es decir, permitiendo el despido barato y fácil, manteniendo los contratos a tiempo parcial y ampliando el me-

canismo de los ERTE cuyo objetivo esencial es rescatar a las grandes empresas reduciendo los costes de personal a costa de un nuevo atraco a los salarios y de seguir engordando una deuda pública que alcanza ya 1,43 billones de euros, supera el 122% del PIB y que seguiremos pagando los trabajadores/as y el pueblo.

La aplicación de este programa es vital para conseguir el máximo apoyo social, pues los servicios públicos son un derecho básico de toda la población. Es la clase trabajadora y, especialmente, sus sectores más oprimidos y precarizados, quienes más pagan las consecuencias del deterioro constante y la privatización de servicios esenciales y necesarios para la reproducción de la vida.



Es la clase trabajadora y sus sectores más oprimidos y precarizados, quienes más pagan las consecuencias del deterioro constante y la privatización de servicios esenciales y necesarios para la reproducción de la vida.

Por unos servicios públicos bajo gestión y control social

Gobierno tras gobierno vemos cómo aparecen casos de corrupción donde los políticos se llenan los bolsillos en colaboración con empresas que logran contratos

millonarios. Desde el caso Mascarillas o el amaño de contratos de obras públicas, en el ministerio de transporte de Ábalos y Koldo, hasta el piso del novio de Ayuso y los contratos millonarios de Quirón. Los argumentos de problemas de gestión solo sirven para justificar unas privatizaciones que empeoran la calidad de los servicios y precarizan las condiciones de los trabajadores/as. Para evitar la corrupción y el enriquecimiento privado defendemos que sean gestionados y controlados por los verdaderamente interesados en que los servicios públicos funcionen bien, y no se derroche un solo euro de sus impuestos; los trabajadores/as y usuarios/as de estos servicios.

Construir la autoorganización de los/las trabajadores/as para luchar por un verdadero plan de rescate de lo público

La falta de inversión pública, la privatización y externalización de servicios esenciales, así como los recortes históricos de cada gobierno resultan una situación dramática para los servicios públicos y los/las trabajadores/as públicos. Poner en marcha, entonces, un programa de este carácter desde las instituciones, exige una lucha a todos los niveles de la clase obrera, la juventud y los sectores populares, esto es, exige ganar al conjunto de la clase trabajadora para apoyar y defender las demandas del sector, buscando su apoyo, y crear un gran movimiento en defensa de los servicios públicos, trasladando las batallas sindicales al terreno político. Los/las trabajadores/as no podemos delegar en la izquierda reformista ni en la burocracia sindical la lucha por nuestros derechos laborales y necesidades sociales.

La patronal, la burocracia sindical, el gobierno y las opciones políticas de la socialdemocracia, que no aspiran a otro proyecto que el de gestionar la miseria, se echan las



Los y las trabajadoras no podemos delegar en la izquierda reformista ni en la burocracia sindical la lucha por nuestros derechos laborales y necesidades sociales.

manos a la cabeza con tales propuestas "utópicas" e irrealizables y nos acusan de querer llevar el país a la "catástrofe". Algunos/as activistas que nos lean pensarán que este programa y estas propuestas no son «realistas» y, en efecto, no se acomodan a los límites de unas leyes injustas que queremos echar abajo. Son, en cambio, un compromiso de lucha y una necesidad cada vez mayor para miles de trabajadores/as que, frente a la situación que hoy vivimos, coleccionan promesas que duran solo lo que duran las campañas electorales en este país.

Para nosotros/as esta propuesta es la más «realista» porque, aunque sabemos que no es fácil, señala el camino que podemos recorrer para solucionar de raíz nuestros problemas: abriendo de paso la puerta a cuestionar las reglas de este sistema injusto, que no tiene nada de democrático.



Estas propuestas son un compromiso de lucha y una necesidad cada vez mayor para miles de trabajadores/as.

Vivienda y energía. ¿Qué entra en lo público y con qué criterio?

Laura R.

El actual contexto de guerra y aumento del gasto militar, en detrimento del gasto social, el deterioro y privatización acelerada de los servicios públicos y la crisis de vivienda, que afecta a toda la Unión Europea, hacen urgente preguntarse sobre el concepto de lo público, conectándolo con el debate presupuestario y relacionarlo con el modelo económico en el que se inserta. Un sistema capitalista que prioriza el capital sobre las necesidades humanas y que convierte en mercancía, todo lo que existe.

Servicios públicos: una conquista parcial y un derecho siempre amenazado

El llamado Estado de Bienestar europeo por el que se establecieron sistemas públicos de sanidad, educación, pensiones y servicios sociales tras la segunda guerra mundial, fue una conquista social muy importante fruto de intensas luchas de la clase trabajadora.

No fue una concesión gratuita del capitalismo sino parte de una estrategia para contener la influencia comunista, evitar nuevos estallidos revolucionarios e ir domesticando a las organizaciones obreras para que se contentasen con las migajas. La burguesía europea pudo permitírselo en un momento de expansión económica, ayudada,

por una enorme inyección de capitales desde EEUU para reconstruir la economía conocida como Plan Marshall, y por el saqueo de los países coloniales. Son los años gloriosos de la socialdemocracia y sus políticas reformistas y de continuidad por parte de los llamados par-

En el Estado Español aún tuvimos que sufrir cuarenta años de dictadura y una transición sangrienta, para lograr algunos derechos sociales y democráticos. Aún así, ni la educación, ni la salud, ni las pensiones, ni mucho menos la vivienda, fueron concebidos nunca como derechos protegidos por la Constitución del 78, puesto que se incluyeron dentro de los llamados "principios rectores de la política social y económica", y no como "derechos fundamentales", que son los recogidos en el capítulo 2 del título 1.

Esto es así porque la Constitución del 78, ya en plena crisis económica mundial, fue elaborada para garantizar la continuidad del capitalismo español, protegiendo los intereses de la oligarquía enriquecida a la sombra del franquismo y los privilegios de la Iglesia católica, limitándose la parte social del texto, a corregir ciertos desequilibrios, de forma más formal que real.

Esto explica que gobiernos de todos los colores aprobasen en estos años distintas leyes que han permitido que la sanidad, la educación, las pensiones o la vivienda, pasasen a ser una fuente de negocios para fondos de inversión, multinacionales, bancos y la Iglesia, convirtiendo lo que son necesidades sociales en mercancías para especular con ellas.



tidos "comunistas", en su colaboración con la burguesía "progresista".

Los servicios públicos no son "regalos" del Estado, sino que salen de la riqueza generada por la clase trabajadora. Pero como todo derecho bajo el capitalismo, más aún en su fase imperialista, estos son siempre parciales y limitados y están continuamente amenazados.

Vivienda: un problema estructural que no ha dejado de agravarse

Si hablamos de necesidades sociales, no podemos eludir hoy el problema de acceso a la vivienda. Lejos de ser un derecho, la vivienda roe salarios y pensiones y es actualmente uno de los mayores factores de empobrecimiento de la clase trabajadora en Europa; medio para el disciplinamiento al capital y un vector fundamental para la desigualdad y la concentración de estas en cada vez menos manos.

La vivienda, sujeta a las leyes del mercado capitalista, se convierte en un producto financiero más, con el que los grandes fondos de inversión han encontrado en el sector inmobiliario un espacio ideal para acumular capital a través de la compra y reventa de propiedades, inflando los precios y desplazando a las familias trabajadoras hacia mercados cada vez más caros y menos accesibles.

Bajo esta lógica y el mantra de la "colaboración público-privada", las medidas aplicadas por la socialdemocracia: bajadas de impuestos a propietarios, facilidades fiscales y recursos públicos para la construcción privada de viviendas, así como sus planes de vivienda, sirven mayormente a los intereses empresariales del capital inmobiliario y especulativo. Lo que los guía es no enfadar demasiado a los rentistas, ni poner en peligro el voto de los propietarios.

Una muestra de estas políticas es el nuevo Plan estatal de Vivienda 2026-2030 del Gobierno Sánchez, que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha calificado como "insuficiente" y "ridículo". Un plan, que lejos de garantizar de forma universal vivienda asequible y frenar la especulación, consolida esta como un negocio.

Este plan no soluciona la precariedad de los contratos temporales y de habitaciones, dejando fuera de protección a parte de las personas más vulnerables y prioriza la crea-

ción de vivienda gestionada por privados en lugar de apostar por una gestión pública directa. Mientras el Estado dedica 33.000 millones de euros anuales al gasto en defensa, la inversión en vivienda protegida contemplada en este plan, equivale al 1% de esa cantidad. Se sigue además hablando de crear vivienda, cuando en el Estado español existen ya casi cuatro millones de viviendas vacías, de las que al menos un millón están en manos de fondos buitres y los llamados grandes tenedores de viviendas (aquellos con diez viviendas o más)

En cuanto a la derecha, su hoja de ruta para solucionar el problema de la vivienda pasa por agilizar los desahucios, persiguiendo lo que ellos llaman "inquietud", restringir aún más la declaración de hogares vulnerables y derogar los topes de alquiler.

Aunque es necesario luchar por medidas transitorias como la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional, una bajada drástica de los alquileres, la implementación de contratos indefinidos o la expropiación de viviendas vacías en manos de fondos buitres, tenemos que ser conscientes de que la vivienda es un problema estructural del capitalismo y como tal, el camino para solucionarlo y garantizar el acceso universal a una vivienda digna para todas, pasa igualmente por sacar ésta del mercado privado y apunta hacia un cambio de modelo productivo.

La energía eléctrica: un derecho crucial en manos de los oligopolios

Otro ejemplo de un servicio crucial para el desarrollo de actividades diarias básicas y reivindicado como un derecho fundamental en nuestra sociedad es la energía. Hablamos de la luz y el gas, esenciales en cualquier hogar, pero cuya provisión universal está lejos de ser garantizada con la privatización del sector eléctrico en el Estado español, lo que es otro ejemplo paradig-

mático de transferencia de activos públicos a manos privadas para priorizar el beneficio económico sobre el bienestar social.

Este proceso, impulsado por gobiernos del PSOE y del PP desde la década de los ochenta, ha transformado un servicio que debería estar garantizado como un derecho fundamental básico, en un negocio dominado por un oligopolio de empresas privadas con el resultado de un incremento sostenido de los precios, una menor soberanía energética y la entrada de fondos de inversión y magnates empresariales.

Por eso, la única medida para asegurar la energía como un bien público estratégico para toda la población es la nacionalización sin indemnización de las empresas energéticas, poniendo éstas bajo control de la clase trabajadora. Esto es también imprescindible para poner en marcha un plan global que reorganice la economía en base a las necesidades sociales y la sostenibilidad ambiental, llevando a cabo una verdadera transición energética planificada democráticamente desde abajo.

Cuando decimos "gobierno quien gobierne, lo público se defiende", y hacemos un llamado a la organización independiente de la clase por encima de cualquier bloque burgués, es porque la realidad demuestra que bajo este sistema económico y este régimen heredero del franquismo, gobierne quien gobierne la lógica capitalista bajo la cual gestionan lo público, mas aún en tiempos de crisis, termina siendo siempre la misma.

La lección que debemos sacar es que, a menos que luchemos por nuestros derechos con el horizonte estratégico de lograr un gobierno obrero donde seamos las y los trabajadores los que tengamos el control democrático sobre las principales palancas de la economía, el capitalismo siempre intentará acabar con cualquier concesión social que sea forzado a darnos por la lucha de clases.

El gasto militar, un gasto improductivo que no crea riqueza social

Laura R.

Hoy, cuando los tambores de guerra vuelven a resonar en toda Europa, el llamado Estado de Bienestar que los gobiernos llevan años desmantelando al compás de la crisis capitalista, corre el riesgo de ser definitivamente enterrado, mientras asistimos a un continuado aumento del gasto militar por parte de todos los imperialismos.

Para llevar a cabo sus guerras y nutrir de efectivos los ejércitos, la burguesía ha recurrido tradicionalmente tanto al reclutamiento de la población mediante el servicio militar obligatorio, como a la creación de los ejércitos profesionales y en los últimos años, también a la contratación por parte de los gobiernos de las Empresas Militares Privadas, cuyos mercenarios a sueldo, llevan a cabo operaciones militares, allá donde sea necesario defender los intereses imperialistas.

Pero en todos los casos, tanto los salarios del personal militar, como el mantenimiento de servicios, instalaciones e infraestructuras, la investigación y desarrollo (I+D) de nuevas armas y equipos, así como el dinero destinado a pagar al complejo militar industrial cada vez más poderoso e influyente del que se benefician también las entidades bancarias que las financian, sale del presupuesto público aprobado por los distintos estados capitalistas.

Evidentemente, la propaganda de la burguesía como clase dominante, tiene que funcionar a toda máquina, para convencer a la población en cada uno de esos países de que ese gasto público es necesario. Necesario para “protegernos de Rusia”, necesario para “defender la democracia”.etc. Incluso se nos

vende que si se hace correctamente, el gasto militar también representa una oportunidad económica. En ese sentido, las recomendaciones de think tanks como el “Centre for European Reform”, hace tiempo que instan a los gobiernos a “construir el apoyo público hacia un mayor gasto en defensa”

La realidad es que el gasto militar es un gasto improductivo en el que los recursos destinados a armas y ejércitos no generan bienes ni servicios; no aumentan la riqueza real de la sociedad ni su bienestar, pero si generan enormes beneficios para una minoría que se apropia de la riqueza producida por la mayoría social.

A eso hay que añadir las consecuencias de agravar la crisis ecológica que vive hoy el planeta y sobre todo, el enorme sufrimiento que causan a las poblaciones que padecen sus guerras por intereses imperialistas, en las que es la clase trabajadora quien pone los muertos y termina enfrentándose entre sí; rompiendo con ello la solidaridad de clase internacional que necesitamos recomponer, para enfrentar a todos los imperialismos.

El Gobierno de Sánchez no es ajeno a esta realidad. Si el gasto militar mundial alcanzó un máximo histórico de 2,9 billones de dólares en 2025, el Estado español entró por primera vez en el grupo de los 15 mayores compradores de armamento del mundo. Y aunque Sánchez insiste en decir que no hay incompatibilidad entre gasto militar y políticas sociales, los números y la política europea dicen lo contrario.

Alemania anunciaba el incremento del 27% del gasto militar, acompañada de un recorte de

16.300 euros en Sanidad. E igualmente el gobierno francés ha optado por un drástico plan de austeridad que recortará 44.000 millones de euros en gasto social para financiar la carrera armamentística.

Siguiendo la estela de sus socios europeos, el Gobierno Sánchez lleva más de 60.000 millones de euros comprometidos en gasto militar desde que llegó a la Moncloa en 2018, con compromisos que se extienden hasta 2042, y con los que el gasto militar ha pasado oficialmente del 0,92% del PIB al 2,1% en 2025, 2,3 veces más.

Pese a sus críticas a Israel, la entidad sionista sigue siendo un proveedor estratégico para las Fuerzas Armadas españolas, decretando nuevas compras prácticamente en cada Consejo de Ministros, sorteando así el debate parlamentario y el techo formal del presupuesto en Defensa estancado en torno a 14.000 millones anuales, dentro de los Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023. Es por esto que Sánchez mantiene una política de “opacidad activa”, con la que protege los intereses de las grandes empresas del complejo militar-industrial con la connivencia de los socios de Gobierno pertenecientes a Sumar.

La seguridad para la clase trabajadora, es poder llegar a fin de mes, pagando el alquiler y la facturas o saber que delante de cualquier enfermedad no tendrán que esperar meses para poder ser atendidos. Es por eso que frente a la actual carrera armamentística y el aumento desbocado del gasto militar seguimos exigiendo: “gastos militares para escuelas y hospitales”

Por un partido y un gobierno de los y las trabajadoras

J. Martínez

Llevamos más de veinte años de deterioro de los servicios públicos, privatizaciones y empeoramiento de las condiciones laborales. A pesar de los nueve años del gobierno “más progresista de la historia” (PSOE y Sumar con el apoyo de toda la izquierda parlamentaria), la situación no se ha revertido sino profundizado, mientras salían a la luz casos de corrupción como el escándalo de las mascarillas. En las comunidades donde gobierna el PP, las privatizaciones avanzan sin pausa, desmantelando la sanidad pública mientras derivan el dinero de nuestros impuestos al Grupo Quirón (también han privatizado y siguen haciéndolo, aunque con menos descarado, los gobiernos del PSOE). Vox, por su parte, crece explotando el descarado contraste que existe entre el discurso del “crecimiento económico” y el “España va bien” del gobierno Sánchez y el empeoramiento de la situación que vive la juventud y el conjunto de la clase trabajadora. Busca el chivo expiatorio en los inmigrantes quienes cubren los puestos de trabajo más precarios y peor pagados, que no son del agrado de los trabajadores autóctonos cabalgando en la contradicción entre el empeoramiento de las condiciones de vida y los discursos de que “España va bien”. En este contexto utilizan la “prioridad nacional” en los servicios públicos para atacar a los trabajadores migrantes, ocultando que en esa prioridad nacional está, ante todo, la prioridad de los empresarios y ricos que se benefician del desmonte de lo público.

Estos partidos no son iguales entre sí. Pero la situación de los servicios públicos y de los salarios no alcanzan para el coste general de



la vida. Mientras los beneficios empresariales batan récords, los ricos son cada vez más ricos, los trabajadores cada vez más pobres y la juventud tiene cada vez menos futuro. Es esta lógica la que demuestra que, al final, todos coinciden en que su prioridad no es el bienestar de la clase trabajadora, sino que “España crezca”, los empresarios estén

contentos, el Ibex 35 pueda seguir haciendo sus negocios y la UE no tenga quejas .

Frente a ello, desde las Mareas de la década pasada hasta el actual ciclo de huelgas en el sector público, los trabajadores y trabajadoras han demostrado su disposición a luchar en defensa de derechos básicos conquistados por genera-

ciones anteriores. Pero esta lucha choca una y otra vez contra el mismo muro: un poder político que depende de los grandes empresarios y banqueros, de aquí y de la Unión Europea (UE), que ante cada crisis aplican recortes que después nunca llegan a revertirse y que es parte de un orden mundial al servicio de las grandes potencias. Un poder político que nos presenta la comedia de unas elecciones en que cada cuatro años nos obligan a elegir el mal menor, sabiendo que ninguno de los partidos revertirá los recortes ni aplicará el programa de rescate de lo público que los trabajadores y trabajadoras necesitamos.

Es por ello que necesitamos construir una alternativa política que defienda los intereses de la clase trabajadora. Un partido de los trabajadores que los organice para resistir los ataques que ya sufrimos y los que vendrán. Que recoja los aprendizajes de todas las luchas y defienda un programa capaz de unificar las luchas de los trabajadores y las trabajadoras y los oprimidos.

Para que eso sea así, ese partido tiene que vincular esas luchas con la lucha por acabar con el capitalismo y levantar una sociedad socialista. Que haya casos de corrupción, que empeoren los servicios públicos o que aumente el coste de la vida con gobiernos de todos los colores no es casualidad: es la consecuencia de vivir en el sistema capitalista. Unos, los trabajadores, producimos la riqueza de la sociedad, obligados a trabajar toda la vida por un salario que apenas alcanza para sobrevivir, mientras otros (banqueros, grandes empresarios y megamillonarios) se apropian de la riqueza que producimos. Mientras vivamos en el capitalismo no habrá paz: en cada momento intentarán quitarnos nuestros derechos, destruir los servicios públicos, aumentar la explotación, y que cosas básicas para nuestra vida como la vivienda o la energía seguirán siendo mercancías. En el ca-

pitalismo, a pesar de la apariencia democrática de algunos gobiernos y sus parlamentos, vivimos bajo la dictadura efectiva, del Ibex, de los Florentino Pérez, Amancio Ortega, los dueños de la UE, los Trump y los Elon Musk. Todos los gobiernos burgueses, compuestos por unos u otros partidos, más allá de sus discursos, garantizarán siempre la base de su poder: la propiedad privada de las grandes empresas y el capital. Y aunque se les puedan arrancar conquistas (como los servicios públicos), éstas serán demanteladas en cada oportunidad para garantizarles más beneficios.

Mientras los trabajadores/as no expropiemos a los grandes empresarios, dinamitemos sus partidos políticos y nos hagamos con el poder, estaremos condenados a una vida de lucha para intentar sobrevivir. Las lecciones de la lucha de clases son claras. Cincuenta años después de la muerte de Franco y de que el partido socialista y el partido comunista firmaran la Constitución del 78, el régimen monárquico sigue en pie. Es esta constitución la que garantiza, con uno u otro gobierno, que la propiedad privada de las grandes empresas prima sobre los derechos básicos y lo público.

Quince años después del 15-M, los Podemos, Sumar, EH Bildu o la CUP, con su estrategia de acumular más fuerza parlamentaria o entrar de muletas en gobiernos del PSOE, muestran que las cosas así no cambian

En un momento en que asistimos a genocidios como el de Palestina; los imperialismos se arman hasta los dientes; Alemania, Francia y los países de la UE en general preparan recortes sociales históricos para financiar el gasto militar sin tocar un céntimo de los beneficios empresariales; aumenta la represión y la explotación contra los trabajadores y oprimidos del mundo; la crisis ecológica avanza sin perspectivas reales de mejora; es más importante que nunca extraer lecciones de los errores del pasado

para no repetirlos. Y la lección más importante es que la única salida de fondo a la lucha en defensa de nuestros derechos es la lucha por un gobierno revolucionario de los trabajadores y oprimidos. El único capaz de aplicar un verdadero programa de rescate de lo público; expropiar sin indemnización las grandes empresas; ponerlas bajo control de los trabajadores; planificar democráticamente la economía al servicio de las necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares; luchar contra toda forma de opresión; dar una respuesta real a la catástrofe ecológica que amenaza al conjunto de la humanidad; romper con la UE y asumir la batalla por una verdadera unidad europea, bajo bases socialistas. Un gobierno así no puede construirse con los partidos del parlamento actual ni dentro de la constitución vigente y sus instituciones. Solo lo podremos levantar con nuevas instituciones surgidas del pueblo trabajador, al calor de su lucha, que funcionen en base a la más amplia democracia obrera.

Este gobierno hoy no es posible porque una mayoría de la clase trabajadora no está unida ni movilizada, no está ganada para el programa socialista y está influenciada por partidos y fuerzas burguesas. Incluso una parte significativa no se reconoce como clase trabajadora. Pero mientras continúe el capitalismo, nuestro presente y más aún nuestro futuro, están en grave riesgo. Por eso necesitamos construir un partido de los trabajadores con un programa revolucionario socialista, forjado en la lucha por nuestros derechos. Un partido que en los grandes momentos de lucha pueda decantar la batalla en favor del poder de los trabajadores. Corriente Roja y La Liga Internacional de los Trabajadores no somos ese partido, pero luchamos por construirlo como parte de la batalla para instaurar un gobierno revolucionario de los trabajadores/as y oprimidos y construir el socialismo.

LA VOZ DE LO PÚBLICO

**¿Por qué luchan los y las docentes?
Conoce la situación laboral de los
trabajadores y trabajadoras del sector
público con testimonios reales.
Encontrarás todas las entrevistas en
nuestra web.**

